

# **EN LUCHA** *"Por la Unidad de los Revolucionarios"*

**Nº 1 - bimestral - junio/julio de 2011 - solidario 10 pesos**

**un censo revelador...**

## **la pobreza encarcelada** (contratapa)



### **sindical**

***trabajadores de supermercados:  
una lucha que continúa***  
págs. centrales



**Ley de Caducidad  
...al final nada**  
pág. 2 y 3

**Impuesto al Agro  
¿y la reforma agraria?**  
pág. 4 y 5

**" Plan Juntos "**  
**un fracaso anunciado**  
pág. 9 y 10

### Anulan, Interpretan, Derogan...

# Al final nada

#### PROUNIR

Asistimos hace pocas semanas atrás a una nueva frustración popular. Frustración del anhelo de anular la Ley de Caducidad. Más allá de que el proyecto -finalmente no aprobado- no anulaba la ley, sino que se limitaba a “interpretarla” sobre la base de un fundamento de inconstitucionalidad de cuatro artículos de la misma.

Había entonces una trampa. La aprobación de dicho proyecto hubiera tropezado al tiempo con la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de los abogados defensores de los represores. Y la Suprema Corte, con toda probabilidad, haría lugar a los mismos. Y estaríamos de vuelta en el mismo lugar...

¿Por qué el Frente Amplio, que dispuso en la anterior administración y en la actual de mayoría parlamentaria, no adoptó ni adopta la única posición que cabe, que es anularla de una vez por todas? ¿Por qué no se ejercitó esa mayoría parlamentaria ya en el anterior gobierno y se permitió que determinados sectores del FA, impulsaran un referéndum de anulación, dejándolo después por parte de la propia dirección del FA (ocupada sobre todo en la campaña electoral) librado a su suerte? ¿Por qué el Dr. Tabare Vázquez, a la sazón Presidentede la Republica, pretendió llevar el 19 de junio del 2008 un frustrado intento de “Punto Final” contra la opinión de Madres y Familiares y otras organizaciones de DDHH, que culminó con la escasa concurrencia al acto de la Plaza Independencia ese día? ¿Por qué cada cierto tiempo Mujica sale a asimilar justicia con venganza, habiendo sostenido tiempo atrás la necesidad de liberar (por “razones humanitarias” y de edad) a los represores detenidos en la cárcel de la calle Domingo Arena? ¿Por qué fue a visitar al general Dalmao, en la prisión donde esta recluido y dijo que el militar se “comió un garrón?”

La única razón que responde a todas estas preguntas es la existencia de una cadena de pactos, que atan a distintos dirigentes y sectores del FA (incluso en distintas épocas), con la defensa de la impunidad de los represores.

Una historia que se puede rastrear en los acuerdos de algunos dirigentes del MLN con sus propios carceleros en el Batallón Florida en 1972. Que se fue extendiendo en otros episodios después de la salida de la dictadura en 1985, en particular con la logia de los “Tenientes de Artigas”.

Ejemplo de lo que afirmamos, aparte de lo ya dicho por Mujica, es la posición contraria de Fernández Huidobro a la extradición a Chile de los represores uruguayos acusados de haber matado hace unos años al bioquímico chileno Berrios, ex agente de la dictadura de Pinochet.

El propio Acuerdo del Club Naval de 1984 fue otro de los mojones de este proceso. Más allá de la letra del mismo, queda cada vez más claro, que se establecieron ciertos pactos (no escritos) entre las FFAA y los negociadores políticos que actuaron a nombre de los partidos involucrados en dicho proceso.

Ahora bien: ¿por qué entonces este proceso que vivimos actualmente es tan retorcido, por que todo este manejo del tema por parte del FA y las sucesivas frustraciones? La explicación es que en este asunto el FA está en un brete.

Por un lado, hay una decisión de no tocar en lo fundamental al aparato represivo. Inciden en este propósito la acción de un verdadero e informal “partido de la impunidad”, que desde

siempre ha actuado subterráneamente dentro del FA y que ahora aparece a la luz. De ahí el carácter de sorpresa, de desconcierto y de dolor que esto tiene para muchos votantes e incluso militantes honestos del propio FA, que quieren que los violadores de los DDHH sean juzgados y castigados.

Pero opera también el hecho fundamental de que la continuación y profundización del modelo capitalista neoliberal, llevado adelante por los gobiernos del FA, exige para su implementación de buenas relaciones con las FFAA, para asegurar su disponibilidad como fuerza disuasiva o incluso represiva frente a la eventualidad de futuras protestas sociales de mayor escala que las actuales.

Y por el otro lado, está el hecho de que la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, es la única que todavía sigue convocando a decenas de miles de personas, como se evidenció en la movilización del último 20 de Mayo. Por ello la frustración sufrida. A lo que hay que agregar otra constatación: el 85 % de los frenteamplistas votó por la anulación de la ley en el Referéndum realizado en octubre de 2009.

Todos estos elementos explican las contradicciones que se manifiestan en el partido de gobierno y lo retorcido de todo este proceso. Mujica tuvo que recurrir al no voto de Semproni para no cargar con el costo político de tener que vetar. Ello se debía al hecho de que los militares le hicieron saber que no respaldaban siquiera este proyecto de falsa anulación.

El manejo que hace ahora el “partido de la impunidad”, es tirar el tema para adelante, confiando en que el vencimiento de los plazos de prescripción en noviembre de los delitos de homicidio, impida la prosecución de los juicios. El proyecto de derogación (para adelante) de la Ley de Caducidad, que se esta manejando ahora, implica un retroceso aun mayor, dejando en manos del Poder Ejecutivo decidir por si mismo por vía de anulación de actos administrativos, cuales casos de abren de acá a noviembre y cuáles no. A ello se le suma el dictamen de la Suprema Corte, según el cual los delitos de homicidio cometidos son “delitos comunes” y no delitos de Lesa Humanidad, de carácter imprescriptible, no pasibles por otra parte de amnistía, caducidad o indulto.

El procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el asesinato del militante Ramón Peré, ocurrido durante la Huelga General de 1973, sirvió de ocasión a que la mitad del generalato se concertara para visitarlo, en una señal publica de solidaridad con el represor. El hecho de que esto pueda todavía seguir ocurriendo, marca una prueba clara de la inalterabilidad en que se mantiene la estructura de las FFAA desde la salida de la dictadura; incluida la vigencia en su seno de concepciones ancladas en la nefasta “Doctrina de la Seguridad Nacional”. La cadena de pactos, debilidades y falta de voluntad del poder político para enfrentarlas, envalentona a los represores y los incita a jugar cada vez más fuerte. La nefasta Ley de Caducidad (y el aparato de impunidades y complicidades que condujo a su sanción y permanencia en el tiempo) sigue aun viva. Contra todo ello, debemos continuar sin pausas en nuestra lucha.

Por lo que parece, después de la frustración de la llamada Ley Interpretativa, se habría abandonado por ahora la vía parlamentaria por parte del oficialismo y se pone el acento la revocación de los actos administrativos, por los cuales se archivaron mas de 80 casos en los años anteriores, al entenderlos





comprendidos en la Ley de Caducidad.

Así el Poder Ejecutivo se ha decidido a hacer lugar al reclamo de Hijos y otras organizaciones y por un decreto se han revocado “por razones de legitimidad” dichos actos. En parte para borrar la mala impresión que produjo en muchos frenteamplistas su actuación en la ocasión del reciente debate parlamentario sobre la Impunidad de los represores y también buscando satisfacer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cual, en ocasión de su fallo en el caso Gelman, había conminado al gobierno uruguayo a eliminar los obstáculos jurídicos que impedían la plena investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

A ello se agrega el dictamen de la Suprema Corte, según el cual los delitos de homicidio cometidos, son delitos comunes que prescribirían en breve y no delitos de Lesa Humanidad, de carácter imprescriptible, no pasibles por otra parte de amnistía, caducidad o indulto.

Por eso ya se esta a la busca de formulas que permitan alargar los plazos de prescripción. La fiscal Mirta Guianze opino que el Parlamento tendría por ley que declarar que los delitos comprendidos en los actos administrativos revocados y que, eventualmente se reabran, sean declarados de Lesa Humanidad.

### **MADRES Y FAMILIARES Y LOS PLEBISCITOS**

Un reciente artículo publicado en el semanario Brecha (“Las políticas de los no acuerdos”, Alejandra Corbo y Florencia Soria, 10-6-2011), hace luz en torno al complicado proceso de contradicciones internas de dicha organización, desde el plebiscito de 1989. Estas diferencias abarcan el aspecto más general de la estrategia a llevar adelante en la lucha por Verdad y Justicia (fundamentalmente entre los partidarios de priorizar la búsqueda de la Verdad y los que consideran además de que no se puede abandonar siquiera transitoriamente la lucha por el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de derechos humanos). Pero además, la actitud a seguir adelante frente a la herramienta del recurso plebiscitario.

La derrota de 1989 condujo a una retracción de la actividad de esa organización, que se extendió hasta 1996, con el comienzo de las Marchas del Silencio los 20 de mayo. La pérdida del Plebiscito del 89 junto a la reticencia de algunos de los integrantes de poner al Poder Judicial ante lo que consideraban un brete, generó que en el primer periodo subsiguiente al 96 se priorizara la búsqueda de la verdad y en particular el paradero de los desaparecidos, opción que teóricamente estaba habilitada por el Art. 4 de la propia Ley de Caducidad.

Así, en la primera Marcha del Silencio, se rechazó incluir la

solicitud de Justicia en la plataforma convocante. Así, más adelante, se resolvió participar en la llamada “Comisión para la Paz” promovida por el gobierno de Jorge Batlle.

En el año 2008, el PIT-CNT junto a grupos del FA como el PCU y el PVP, impulsaron una nueva campaña de recolección de firmas para plebiscitar una Ley de Reforma Constitucional que anulara la Ley de Impunidad. Madres y Familiares no acompañó la recogida de firmas. Ello creó una nueva división en la organización, pues algunos familiares (más vinculados al PVP), participaron a título individual en dicho proceso Otros en cambio alertaron, tanto contra la partidización previa del mismo, como la posibilidad de que se perdiera, por el hecho además de coincidir con las elecciones nacionales y esto condujera a una nueva frustración popular.

Otros, como Oscar Urtasun, consideraban que “se debía hacer una campaña de sensibilización en el ámbito político y en la población, antes de juntar las firmas”, agregando que la preocupación de algunos grupos del FA de aprovechar la campaña para “marcar perfil”, no fue ajena a la precipitación con que se actuó: “Cuatro de los que manejaron el micrófono salieron diputados o senadores ¿Se partidizó o no la campaña?”. (Citado por la nota de Brecha)

El esfuerzo en las últimas semanas de cientos de militantes que se sumaron al último tramo de la campaña, y el multitudinario acto de cierre, le dieron un impulso a la movilización y abrieron una esperanza. Y si bien faltaron 4 puntos para lograr la mayoría requerida para la anulación, es evidente que el peso de los factores mencionados anteriormente, tuvieron un rol decisivo en el resultado desfavorable.

La forma en que fue promovido el Referéndum y la falta de preparación previa; y el no haberlo discutido con Madres y Familiares -el PIT-CNT y sectores del FA, lanzaron la campaña en algunos departamentos del interior sin consultar a Madres y Familiares-, fueron parte de una política de hechos consumados. Luego de avanzada la campaña, incidió la acción de los “partidarios de la impunidad dentro del FA” (por ejemplo, las declaraciones de Fernández Huidobro y otros dirigentes del FA), sin excluir a Mujica que firmó a último momento y para la foto. Luego en la campaña electoral, ni Mujica, ni la mayoría de los aspirantes a cargos parlamentarios del “progresismo”, mencionaron el tema de la anulación de la Ley de Impunidad. Siempre deben decirse estas cosas. Y no ocultar la responsabilidad que tuvieron en la nueva frustración de cientos de miles uruguayos. Que no renunciaban a que se hiciera Justicia.

El "Impuesto al Agro"...

## *La propiedad (de la tierra) no se toca*

Mario Pieri (Colectivo Militante)

Maniobra política, bandazos, cortina de humo, operación mediática, han sido los calificativos que desde distintos sectores del Frente Amplio y también desde la izquierda radical ha merecido la iniciativa del presidente Mujica de gravar con un nuevo impuesto a los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas. Aunque todavía no hay nada resultado.

La propuesta es aumentar de 4 a 8 dólares a quienes posean entre 2.000 y 5.000 hectáreas, 12 dólares a los que posean entre 5.000 y 10.000 y 16 dólares a los que posean más de 10.000 hectáreas. Para todas las franjas el índice Coneat (productividad de la tierra en kilos de carne bobina, ovina y lana) tiene que ser mayor a 100.

Se estima que la recaudación anual sería de unos 60 millones de dólares. Las reacciones en contra no se hicieron esperar, desde los patrones de la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural, hasta la oposición blanca y colorada, Y, también, desde la conducción económica que lidera el vicepresidente Astori. En particular se hace eje en el supuesto "cambio de reglas de juego" que la iniciativa implica, y que podrían afectar el "buen clima para los negocios" que ofrece el país, además de crear "dificultades en la "inserción internacional" (en la integración subordinada a la mundialización capitalista).

En realidad, no podemos decir que Mujica sea un improvisado en los temas agropecuarios; desde los tiempos del Movimiento por la Tierra, de su actividad parlamentaria y en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el tema ha sido el eje de su militancia política. Entonces, nuestra hipótesis es que esta "cuestión del agro" se ubica en una perspectiva de acumulación capitalista que tiene sus matices con la defendida por el equipo económico liderado por Astori.

Ambos bloques, el de Mujica y el de Astori, mantienen diferencias que no son sólo de las "herramientas" a utilizar, sino también de objetivos. Todo lo contrario a lo que afirma el diputado Asti de Asamblea Uruguay: "No hay lugar a duda sobre la necesidad y la prioridad de mejorar la infraestructura pública, y en particular la caminería que accede hasta los predios rurales y comunica a éstos con los centros de distribución de la producción agropecuaria (...) Tampoco hay diferencias en considerar que el sector agropecuario tiene una carga impositiva menor a la del resto de los sectores productivos (...) podemos concluir que todo el gobierno y su fuerza política apoyan la conocida posición del presidente Mujica de aumentar la actual tributación al agro con destino al financiamiento de las obras de infraestructura" [Alfredo Asti, El debate sobre la tributación al agro, semanario Crónicas, 17-6-2011]

La propuesta de Mujica no tiene como objetivo la recaudación, ni el financiamiento de obras de infraestructura, por lo tanto tampoco el eje de la discusión son las "herramientas". Por ello, no tuvo inconvenientes en cederle al astorismo la eliminación del impuesto a los semovientes, con lo que se renuncia a recaudar 18 millones de dólares, o sea de 60 pasamos a 42. El objetivo es tomar medidas para desestimular la concentración y la

extranjerización de la tierra (el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra). Y fortalecer el Instituto Nacional de Colonización (INC). En la plataforma electoral, el Frente Amplio se comprometió a incorporar 250.000 hectáreas al INC para distribuir entre 2.500 familias provenientes de la producción familiar y asalariados rurales. Esto se fundamenta en un documento del CADEYSIC Centro Artiguista por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (CADEYSIC) ligado al MPP de diciembre de 2010: "Los sectores sociales de los cambios son los históricamente excluidos en el medio rural, los productores familiares, los asalariados rurales y los desocupados del medio rural, conjuntamente con las Organizaciones sociales y sindicales que los nuclean".

Según Guillermo Gonzalves: "Hoy en día, coexisten dos modelos en el medio rural a nivel nacional y regional, que tienen lógicas diferentes por los sectores sociales que involucran, por los intereses que representan y por los beneficios generados y apropiados a través del modelo de acumulación. Por un lado la dimensión que representa la agricultura familiar, campesina e indígena en contraposición al avance del agronegocio agroalimentario exportador; dimensión en el sentido de su contribución a las economías de la región y producción y también dimensión social y política." [La problemática de la tierra en Uruguay. Un recurso natural estratégico que merece de políticas de estado nacional y regional [http://www.cadesyc.org/aporte\\_guille\\_agro.html](http://www.cadesyc.org/aporte_guille_agro.html)]

Se trata de medidas que apuntan a favorecer lo que Mujica llama la "clase media rural", productores que en general son propietarios de terrenos de menos de mil hectáreas.

### **UN GOBIERNO ¿DOS PROGRAMAS ECONOMICOS?**

En efecto, el debate involucra una serie de ejes y visiones diferentes sobre la política económica. El equipo económico de Astori había logrado hasta ahora bloquear o morigerar las propuestas "polémicas" de Mujica; como la de utilizar las reservas para el restablecimiento del transporte ferroviario y la construcción de escuelas; la de bajar el IVA con el objetivo de "redistribuir la riqueza"; y ahora junto al "impuesto al agro" el cuestionamiento a la política antinflacionaria. Esta última se centra en encarecer el crédito al consumo al aumentar los encajes bancarios y el mantenimiento de los precios de los combustibles. Para los economistas del MPP, en la medida que "la inflación es importada" estas medidas no tienen el efecto esperado y apuntan a la rebaja de algunos artículos de la canasta familiar.

En torno a las propuestas del MPP, se han alineado el PCU, el PVP, el PS y la VA, el subsecretario de economía Pedro Buonomo, y la OPP dirigida por Gabriel Frugoni y Gerónimo Roca. En el campo astorista, el Frente Liber Seregni, el Ministro de Economía Fernando Lorenzo, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, Pablo Ferreri director de la DGI y Andrés Masoller, jefe de la Asesoría Macroeconómica del ministerio.

Esto alimenta la falsa tesis del "gobierno en disputa" amplificada por la propaganda del MPP en los medios

oficialistas: “El debate abierto en el seno del gobierno, y los distintos movimientos que se han dado en el escenario, dan fe de dos visiones enfrentadas, por lo que resulta difícil abstenerse de la lectura de un gobierno en disputa.” [Víctor Abelando, semanario Brecha 17-6-2011]

Mujica aprovechó la oportunidad para cambiar los ejes de la discusión, y revertir de paso la caída de su popularidad (según Interconsult pasó de 75% al 41% en quince meses, y según Equipos Mori de 73% a 44% en el mismo período); intentar la correlación de fuerzas en el terreno de la política económica y ante una franja importante de los militantes frenteamplistas, recolocarse como la opción de “izquierda” luego de la frustración que generó la discusión parlamentaria sobre la Ley de Impunidad.

No obstante el ruido generado, el tema de fondo no figura en la discusión. Muchas idas y venidas sobre la “concentración y extranjerización de la tierra”, o sobre cómo “detener el avance de las transnacionales”. En apariencia, la “disputa” es en torno al programa y a la “estrategia de desarrollo”. Pero es un engaño. Porque la cuestión decisiva de la propiedad de la tierra no está en la agenda del progresismo. Es decir, aquél reclamo de Sendic de “expropiar a los expropiadores”, fue enterrado por sus antiguos camaradas.

**¿Y LA REFORMA AGRARIA?**

En los años 1960 y 1970, los tupamaros (y toda la izquierda) sustentaban la necesidad de una Reforma Agraria, y denunciaban como latifundistas a los propietarios de tierra con más de 5.000 hectáreas. La expropiación de la estancia de Silva y Rosas con 30.000 hectáreas se había transformado en la demanda central de los “peludos” de Bella Unión. La consigna “Por la tierra y con Sendic” que levantaba la Unión de Trabajadores

Azucareros de Artigas (UTAA), desató un proceso de luchas y marchas multitudinarias que colocó a los “peludos” a la cabeza del movimiento más radical de peones rurales que ha conocido el país.

A tal punto, que UTAA se convirtió por aquellos años en una de las mejores expresiones de la vanguardia obrera del país: Aquella “rebelión de los cañeros” -que se negaba a dialogar con cualquier gobernante y llamaba a “armarse para luchar”-, exigía en su programa la expropiación de los capitalistas y “tierra para quien la trabaja”. En una palabra, el proletariado cañero cuestionaba la propiedad privada y luchaba por una Reforma Agraria.

Ya en el campo progresista (y en el gobierno), los tupamaros (y la mayoría de la izquierda), se pasaron al orden del capital. Y mandaron al baúl de los recuerdos aquellas demandas que ellos mismos promovían. Como subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, marcaba el punto de “inflexión” en relación a la cuestión de la tierra: “Después de mucho reflexionar y discutir con los productores, discutir con el gobierno, no impulsamos más que 'la tierra sea para el que la trabaja'. El que la trabaja no tiene necesidad de ser propietario jurídico de la tierra. Vale mucha plata. Mejor que el que tiene capital lo ponga a producir”. (Entrevista del 11-4-2008, citada por Alain Labrousse, “Una historia de los tupamaros. De Sendic a Mujica”, Editorial Fin de Siglo, primera edición, Montevideo, 2009)

Su jefe inmediato, Mujica, opinaba parecido: “Yo, hoy, no pienso que el poder solo sea una cuestión de propiedad, es además una cuestión de gestión. Y pienso que los sectores populares no sabemos gestionar”. (Entrevista del 5-4-2008, citada por Labrousse). La renuncia programática estaba certificada.

**Proyecto Minería a Cielo Abierto**  
**¿Inversiones o Saqueo?**

**Fernando Uturburu (Militantes Guevaristas)**

El “progresismo” sigue adelante con los proyectos de inversiones (extranjeras) que se había trazado en 2005. La marcha del programa favorable al gran capital no logra tener freno. Más allá de algunas “chácharas” discursivas. No hay ninguna “ida más a la izquierda”, “ni justicia social”, “ni distribución de la riqueza”. Lo que hay, y cada vez más, son empresas multinacionales que vienen “por todo” en términos de recursos naturales.

El “enfrentamiento” entre Mujica y los “ambientalistas” -y la soberbia e ignorancia del presidente-, viene de mucho antes. No obstante, el “aparente” desconocimiento del jefe de Estado no es sólo un atributo personal. Es propiedad de todo el gobierno del Frente Amplio.

En el período anterior, bajo la administración Vázquez, el fiscal Viana había realizado una demanda contra el Estado por los “desórdenes” del contrato con Botnia, sobre los datos de la contaminación, etc. El 12/5/2011 el semanario Búsqueda publicó un extracto del contrato firmado entre el gobierno y Montes del Plata, el 18 de enero de 2011, días después, el mismo fiscal Viana, solicitó ver el contrato del gobierno con Montes del Plata, para la realización de la otra gran pastera. Se le negó porque dicho contrato incluye una cláusula de “confidencialidad”, donde ambas partes se obligan a no divulgar información sobre dicho contrato. “El Fiscal considera que estas negociaciones secretas del Poder Ejecutivo atentan contra lo que es un asunto de interés general o

público de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República; contra las previsiones del marco jurídico ambiental; contra la ley de libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y contra la transparencia democrática”. (ver [www.quayubira.org.uy](http://www.quayubira.org.uy))

El 27 de mayo, en Cerro Largo, en un discurso, Mujica la emprendió “grotescamente” contra los vecinos de Barra de Valizas, (tratándolos entre otras cosas, de roñosos), porque pretende privatizar las dunas de Cabo Polonio. (ver respuesta del cabildo de Barra de Valizas en nota aparte). Esto sigue la línea de Mujica, cuando en 2005 trató de “mongólicos” a los integrantes de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida.

El 10 de mayo, la DINAMA rechazó el proyecto de Aratirí (Minería Cielo Abierto), y ésta prepara otro. Sin embargo, en el Consejo de Ministros circuló un documento a favor de la propuesta de Aratirí, a cuyo frente se encuentra el socialista y ex presidente de A.N.P. (Administración Nacional de Puertos) Fernando Puntigliano. Mujica lo apoyó. Luego del rechazo por “múltiples irregularidades” que efectuó la DINAMA, la empresa Aratirí decidió hacer uno nuevo con el aval de Cyro Croce, un ex integrante de la DINAMA que trabaja para Aratirí. (Búsqueda, 2/6/2011).

continúa en pag. 8



## Supermercados

*Los trabajadores perdieron el miedo***Nelson Caraballo\***

Los jóvenes sindicatos de supermercados encararon su primera gran lucha desde que surgieron alrededor de 2008. Gracias a la formación de sindicatos, los trabajadores mejoraron algo su calidad de empleo que es una de las peores que existen en el país: sueldos "sumergidos" (6.638 pesos netos), horarios rotativos constantes, incumplimiento de la "ley de la silla", presión de mandos medios y superiores, pago de presentimos con vales o tickets que solo pueden ser usados dentro del mismo comercio, dar la cara constantemente ante el malestar de la gente, realizar tareas ajenas a su sector o cargo, y represión sindical. Esto hace que el estado de ánimo de los trabajadores sea de furia y cansancio.

En esta instancia, los trabajadores reclamaron en su mayoría derechos básicos y aumento salarial. La base de los sindicatos demandaba aumentar el salario a 9.600 pesos retroactivos a enero de 2010; pero las patronales en las primeras rondas de negociación solo accedían a llegar a esa cifra en 2012 al finalizar el convenio y no al comienzo como exigían los trabajadores. La intransigencia patronal en la negociación colectiva y en los Consejos de Salarios agudizó el conflicto en los meses siguientes. Este conflicto llevó a los trabajadores a ocupar por primera vez en la historia las grandes superficies de supermercados del Uruguay (como por ejemplo el Geant). Estas medidas de lucha tuvieron sus consecuencias positivas y negativas en la relación patrón-empleado. En la negociación los empresarios "aflojaron" un poco el bolsillo y tras acordar con la dirección de Fucys -"cocinando" nuevamente a los trabajadores de base que querían continuar el conflicto- ofrecieron 9.600 pesos, pero se llegaría a esa cifra con presentismo (de 400 a 1.000 pesos dependiendo del supermercado), y con "pequeños" ajustes a la antigüedad. Estos pequeños ajustes benefician más a los trabajadores nuevos que a los antiguos en la empresa ya que muchos de los "viejos" no gozan del beneficio.

Esto no era lo que buscaban los trabajadores y el conflicto llevó a que muchos militantes se "quemaran" y dejaran sus sindicatos o descreyeran totalmente de la dirección de Fucys, cuyos son integrantes pertenecen a la Articulación, corriente burocrática que es parte del bloque mayoritario del PIT-CNT aliado al gobierno del

gobierno del Frente Amplio. Algunos de los sindicatos presionados por las bases enviaron cartas de repudio o de malestar a Fucys, y empujó el SUTT (Sindicato Unido de Trabajadores de TaTa) para continuar el conflicto, aún después de que finalizaran los Consejos de Salarios. La reacción de Fucys (como en todo el conflicto) fue en contra de los trabajadores, amenazándolos con la policía si no abandonaban las medidas de lucha. Acorralados por las presiones de Fucys, la patronal y la policía, los trabajadores se vieron obligados a replegarse. Las sanciones en TaTa no se hicieron esperar.

Por su parte, las patronales ha aumentado los ataques contra los sindicatos, en especial en los supermercados Disco-Devoto-Geant, pertenecientes al Grupo Casino (multinacional de capitales franceses). Sanciones arbitrarias y "misteriosas" desapariciones de dinero a cajas sindicalizadas con denuncia policial, crearon un clima de miedo y persecución contra los trabajadores organizados.

Todos sabemos que los 8.000 pesos y algo más de presentismo que se consiguieron, significan una derrota que Fucys disfrazó de triunfo. Una muestra más que el sindicalismo conciliador no apoya la lucha clasista y consecuente de los trabajadores. En tal sentido, la "alta afiliación" que tanto festejan, solo sirve a fines recaudatorios, ya que no es una herramienta para el fortalecimiento de la organización. Mientras los trabajadores de base y los militantes, son los que sufren la ofensiva patronal y las condiciones de sobreexplotación, la burocracia sindical negocia por debajo de la mesa y renuncia a las demandas obreras. Sin embargo, muchos trabajadores les perdieron el miedo a los patrones en los supermercados. Y comienzan a crearse pequeños grupos clasistas dentro de los sindicatos, que socializan las experiencias de lucha y comprenden el poder de la unidad. Es el aspecto más positivo que se rescata del largo y combativo conflicto.

**\* El compañero Nelson fue despedido de un supermercado en la Ciudad de la Costa. Su falta consistió en no ir a trabajar el 1º de Mayo. La patronal calificó la decisión de "inaceptable".**

**Entrevista a María , trabajadora del hipermercado Géant***“NO obtuvimos lo que reclamábamos”*

Tiene 21 años. Es activista de la organización sindical desde que comenzó a trabajar, hace un año y medio. Participó activamente en la construcción del sindicato, no aceptó responsabilidades de dirección por sentirse "inexperta". En varias asambleas sus posturas clasistas y combativas fueron aceptadas por sus compañeros, muchas otras veces fueron cuestionadas y/o manipuladas por los delegados. Estuvo comprometida en todas las movilizaciones, impulsó y apoyó todas las ocupaciones de otros supermercados. Como joven trabajadora sufrió las maniobras de los dirigentes de Fucys. Es respetada por los compañeros/as, pero los dirigentes han hecho su campaña de "estigmatización", presentándola como "una radical". María vive las penurias económicas, pero adopta la dignidad de clase como trabajadora explotada. Está haciendo "camino al andar". Con firmeza y decisión. Y, sin duda, será respaldada, apoyada, respetada. No sin antes recorrer el duro camino como mujer joven y trabajadora, perseguida por las patronales y los burócratas sindicales. Con ella conversó **En Lucha**.

## ***¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en Geant antes del conflicto?***

Las condiciones de trabajo eran bastante malas ya que no respetaban los derechos de los trabajadores y más de una vez pasaban por alto los derechos humanos. Había mucha represión sindical de parte de los jefes, no dejaban salir a las movilizaciones ni a las asambleas y no te querían cambiar los horarios para ir a las reuniones de la vivienda sindical.

## ***¿Cómo llegaron o resolvieron comenzar el conflicto? Porque recuerdo haber pasado por avenida Giannatassio y ver un gran cartel que decía “10.000 PESOS O PIQUETE”***

Se comenzó con el conflicto debido a que las patronales no quisieron en un principio negociar con los trabajadores, en varias reuniones empezaron a tirar cifras que en verdad eran una gran tomadura de pelo a los trabajadores. Los pasacalles fueron una advertencia a lo que después vino, se organizaron ocupaciones y al finalizarla se programaba la otra y así fueron con todas.

## ***¿Cuántos/as trabajan en Géant y cuántos están afiliados al sindicato?***

En estos momentos somos unos 1.000 trabajadores y afiliados al sindicato seremos unos 300 más o menos.

## ***¿Los no afiliados participaron de los paros y las movilizaciones?***

Por lo general no, la excepción fue el día de la ocupación que hubieron compañeros que se quedaban un rato no siendo afiliados al sindicato, también nos pasó que en el momento que estábamos haciendo un paro que trancamos la puerta 1 y cuando ocupamos el Géant hubieron compañeros que se acercaron en ese momento para afiliarse.

## ***¿Dónde y cómo se resolvió la plataforma?***

Los trabajadores decidimos pedir 10.000 pesos pero Fucys se “adelantó” y armó la plataforma como a ellos le parecía y pidieron 9.600, cuando llegamos con la plataforma ya lo tenían todo cocinado y no había vuelta atrás y esa fue la manera de actuar de ellos durante todo el conflicto. No les importaban los trabajadores, solo querían quedar aparecer como “razonables” ante los patrones.

## ***¿Qué papel jugó la dirección de Fucys?***

Cómo te decía, trataron en todo momento de no “molestar” a los propietarios de las empresas, pero se vieron sorprendidos cuando empezamos a ocupar, ellos no se lo esperaban, entonces no les quedó otra: “estaban en el baile y solo les quedaba bailar”. Igual nos hicieron varias maniobras sucias, ya que de la nada los patrones sabían antes que los trabajadores que local sería el ocupado, el día y la hora.

## ***¿Lograron una acción común con trabajadores de otros supermercados?***

Por un momento pensé que sí, pero después me di cuenta que en realidad estaban usando el conflicto para trepar en la política, por lo tanto no se sumaban, solo buscaban a quien les podían servir para ese momento y en un futuro en su carrera. A la prueba está lo que hicieron con los compañeros de TaTa; los dirigentes de Fucys presionaban sistemáticamente para que levanten las ocupaciones y finalizaran el conflicto. De todas maneras, los trabajadores de TaTa tomaron la decisión de seguir luchando por esos 9.600 y distintos puntos de la plataforma, medida que desde mi punto de vista estaba perfecto. Para la dirección de Fucys esto estaba muy mal, y mandaron a la policía para desalojarlos.

## ***¿Cómo está el estado de ánimo después del conflicto? ¿Hubo mejoras sustanciales en la calidad del trabajo?***

El estado de ánimo no cambió mucho ya que siguieron con represiones a compañeros y compañeras como echarlos o denunciados a “delitos complejos”, lo que es inaudito. ¿Mejoras? Eso parece no existir en el Géant al día de hoy, preguntás por el aumento y te contestan “no tengo nada por el momento”, eso es solo una parte, después nos cambian la rotación, nunca estás estable y tampoco importa en qué parte trabajás. Para la patronal es lo mismo una persona que entró hace un mes a otra que tiene una antigüedad de dos años.

## ***¿Puede decirse que no obtuvieron lo que reclamaban?***

No logramos la demanda central. Los 9.600 pesos que exigíamos ya eran una miseria y apenas nos concedieron 8.800, cuando para vivir más o menos decentemente se precisa como mínimo 22.000 pesos. Entonces, no obtuvimos lo que reclamábamos. Mientras ellos, los patrones y los gerentes, viajan en avión privado y duermen en cama de oro, nosotros tenemos que seguir haciendo malabares para poder llegar al próximo cobro, y todavía si faltás porque no tenés plata para el ómnibus te sancionan.

## ***¿Cómo está la organización sindical? ¿Salió fortalecida o debilitada? ¿Hay más trabajadores interesados en afiliarse? ¿Sintieron que valió la pena la lucha?***

Yo creo que la lucha siempre vale la pena, siempre que se luche sirve. La organización no está del todo fortalecida, ya que hay muchos oportunistas que buscan hacer carrera política a la interna del sindicato: “es como la manzana podrida que pudre el resto”. Hay una gran manipulación y siempre se termina haciendo cualquier cosa menos lo que se decide en asamblea y luego ponen excusas. Hubo sí un aumento de los afiliados al sindicato, lo que no deja de ser importante.

## ***¿Hay persecución sindical?***

Sí, la persecución sindical continúa y se va a profundizar en la medida que los trabajadores mantengan su voluntad de organizarse para luchar.

## ***¿Pensaron en crear una unidad más amplia con trabajadores de otros supermercados?***

El tema de crear esa unidad con trabajadores de otros supermercados es nuestro planteo. Sería muy importante, porque tenemos los mismos intereses; pero a los patrones y a los dirigentes de Fucys no les sirve. Para conseguir este objetivo primero tenemos que fortalecer nuestra organización sindical de base, promover las asambleas, respetar las decisiones de las mismas, En definitiva, hay que seguir avanzando en un proceso de maduración y ver cómo ayudamos a formar un espacio amplio y clasista con otros sindicatos.

viene de pag. 5

El proyecto Aratirí ha sido duramente criticado por ambientalistas y productores, y también ha generado divisiones a la interna del movimiento sindical. Mientras FFOSE se opone, el SUNCA, la UNTMRA y FANCAP apoyan. El PIT-CNT deberá “analizarlo con tranquilidad y con todos los elementos” según Fernando Pereira, (Articulación).

Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), manifestó que: “desde la administración Vázquez, ha habido un debilitamiento en la gestión ambiental, aunque todavía no hemos tocado fondo”. Agregó “que el MVOTMA era la única cartera donde se discutían temas ambientales, y se suspendían reuniones (...) ahora Mujica y Berterreche (INC), aplican un modelo agropecuario que viene del siglo pasado, convencional, no cuentan con adecuadas bases teóricas y medidas de gestión para lidiar con los efectos negativos de la actual expansión agropecuaria”. “el gobierno no tiene margen fiscal y apela a fuentes de ingresos sorprendentes como vender dunas (...) la venta de dunas, el proyecto Aratirí, forman parte de un paquete: vender o enajenar para recibir plata en el corto plazo”. Agregó. (El País 5/6/2011).

Por su parte Jorge Rucks, (titular de la DINAMA), indicó que: “el desafío mayor del gobierno es encontrar el equilibrio entre el Uruguay Productivo y el Uruguay Natural (...) la DINAMA controla menos del 10% de las empresas” (El País 5/6/2011)

Los proyectos Montes del Plata (celulosa) y Aratirí, (megaminería), serían las inversiones más grandes de la historia del Uruguay, podría ascender a los 5 mil millones de dólares. Lo que es incalculable es el destrozo ambiental, el saqueo de recursos naturales y las gigantescas ganancias que se llevan estas multinacionales. Para referencia tenemos a Fray Bentos, que sigue con el índice más alto de desocupación del país: 9,7%.

Ricardo Carrere miembro de Guayubira, manifestó: “lo que más me preocupa de este gobierno es el presidente”, y agregó “no creo que en el FA haya tal desconocimiento, creo que ponen lo económico por encima de todo” (El País 5/6/2011). En la misma dirección, el Fiscal Enrique Viana manifestó: “no hay nada para festejar en el día del medio ambiente, plumbemia en niños, desechos de Dirox sobre el acuífero Raigón, forestación a mansalva, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, transgénicos, agrotóxicos, contaminación de las aguas, colector de Punta Carretas roto”. (El País 5/6/2011). Selva Ortiz (integrante de Redes Amigos de la Tierra), manifestó: “estos convenios de inversión en que se dan todo tipo de beneficios a inversores extranjeros, generan pérdida de soberanía, alarmante” (El País 5/6/2011)

El 10 de junio, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias en Malvín Norte, se reunieron unas 300 personas para asistir a la conferencia “Minería del hierro en el Uruguay: la visión de los profesionales”, convocada por la Sociedad Uruguaya de Geología. La invitación prometía varios abordajes: la descripción del proyecto, el contexto geológico y económico, los estudios de impacto ambiental. Lo que obtuvieron – así lo denunciaron varios participantes – fue mera propaganda.

En el espacio previsto para las preguntas, los ánimos se caldearon. Se cuestionó el tono propagandístico de las presentaciones y se cuestionó la ausencia de menciones a los conflictos con los distintos grupos de vecinos afectados. También cuestionaron a la Sociedad Uruguaya de Geología por utilizar el auditorio universitario para promocionar un emprendimiento privado. “yo quedé sorprendida de la convocatoria por parte de la Sociedad Uruguaya de Geología, que hablaba de la visión de los profesionales y enmarcaba el evento en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, fue solo la voz de la empresa la escuchada, y la de los profesionales afines al proyecto. Es esperable que una actividad organizada en la facultad diera participación en la mesa a otras disciplinas y visiones independientes” señaló la investigadora Alice Altesor, del Depto.

De Ecología. (Brecha 17/6/2011)

“Las inversiones extranjeras que llegaron a Uruguay en los últimos 6 años, son exclusivamente para extraer recursos naturales. El país no ha sido capaz de atraer capitales que inviertan en actividades que generen valor, y no ha encontrado la forma de que estas inversiones generen investigación y desarrollo para poder completar los ciclos productivos en las que están embarcadas. Se explota el recurso natural hasta que se termine, ¿y que queda después? En el largo plazo la apuesta no parece ser la adecuada. (Reto Bertoni – Investigador de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar – Brecha 17/6/2011).

Aratirí aumentará 20% de la demanda energética. Dado el alto riesgo de contaminación del carbón, el estado se comprometió a abastecer el proyecto con la energía que necesita, que son 200 megavatios. El desafío es enorme, hoy la demanda energética del país es de 1.050 megavatios con picos de 1700, y a eso hay que agregarle el 20% mas, que demanda la minera. (Brecha 17/6/2011)

Hay cerca de 2.000 millones de toneladas del mineral, por lo que la empresa considera que podrían estar entre 40 y 60 años para sacar todo. (Brecha 17/6/2011)

LA INFORMACION QUE DES-INFORMA

El proyecto tiene como objetivo la extracción de 10.000.000 de toneladas anuales de hierro. Para lograr este objetivo se utilizaran 43.000 toneladas de explosivos por año, se consumirán 300.000 m3 de agua por día, el equivalente al consumo de una población como la ciudad de Paysandú. Para extraer el mineral de la roca se utilizaran productos químicos, tales como cianuro, ácido sulfúrico, azufre y uranio, éstos químicos quedan a cielo abierto contaminando la tierra, el agua, el aire, y todos los seres vivos.

El cánón que pagará Aratirí será de un 2% o 3% del mineral extraído en el año, si se estiman 10 millones de toneladas, lo que dejaría al país es entre u\$s 20 millones y u\$s 30 millones. A esto debemos sumarle la solicitud de beneficio de la Ley de Protección de Inversiones, por la que pagarán muy bajos o ningún impuesto.

No existe un solo ejemplo de megaminería que no haya dejado miseria, muerte y devastación. Expertos sostienen que ninguna industria es tan destructora desde lo social, ambiental y cultural como la megaminería Los casos de cáncer en Andalgalá, Colombia trepó a 400%.

Aratirí construirá un mineroducto de unos 60 cm de diámetro y 230 km de largo atravesando los departamentos de Lavalleja y Rocha hasta la playa “La Angostura” entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del diablo. El mineroducto atravesaría los Humedales del Este, los Palmares de Rocha y bordearía la Laguna Negra, iconos del departamento y zona de reserva turística (decreto 12.990), declarado Patrimonio Mundial de la Biósfera. Por supuesto que esta tubería puede sufrir roturas, provocando derrames y por consiguiente daño ecológico, del cual no se hará cargo la minera. En la costa se construirá un puerto de aguas profundas con un muelle de 2.5 km de longitud y un muelle rompe olas en forma de T. Para el acceso de barcos de gran calado se deberá dragar un canal de 10 km de largo. Con la construcción de este puerto se verá afectada una vasta zona turística como Aguas Dulces, La Esmeralda, Punta del Diablo, etc. No olvidemos que en esta zona mucha gente vive de la pesca artesanal la que desaparecerá por el movimiento de los barcos y la contaminación del agua ya que por el mineroducto se transporta el mineral con agua y este llega por medio de una cinta transportadora hasta el barco derramándose agua en el océano.

Los principales impactos de la extracción del mineral son: a) afectación a la topografía por desestabilización de taludes, deslizamientos, remoción en masa y desencadenamiento de



procesos erosivos; b) remoción de suelo y pérdida de cantidad y calidad del recurso; y c) desviación de aguas superficiales. Según el informe, estos impactos serían permanentes e irreversibles. Según Aratirí, la desviación de los cauces tiene un "alto impacto en el medio ambiente y en los usuarios de agua en el área próxima a las instalaciones de la operación minera". A esto debe agregarse la reducción de la calidad del agua superficial por la infiltración de minas y depósitos, que será permanente. Cabe consignar, que la DI.NA.MA., procedió a aplicar una multa de U\$S 70.000.- a la empresa por realizar perforaciones sin permiso. Aratirí, apeló esa resolución manifestando que las autoridades se equivocaron. La multa está en suspenso.

En Argentina, el mineroducto de La Alumbraera tuvo en 2004 un derrame de 70 metros cúbicos de concentrado de oro y cobre. Hubo nuevos accidentes, varios no registrados porque se prohíbe el acceso del público a la zona. En Chile hay 14 mineroductos y año a año se registran incidentes. La prensa informó de un accidente del mineroducto de Anglo Chile en 2007, dos accidentes de Minera Escondida en 2008 y uno de Los Pelambres en 2009

**PROMESAS (FALSAS) DE EMPLEO**

Aratirí promete 3.450 empleos directos y entre 10 y 15 mil empleos indirectos, pero la experiencia internacional no confirma esos cálculos y los empleos que serían posibles no compensan los empleos ya existentes. El proyecto dará ocupación a 1.300 obreros en el distrito minero, 10 en el mineroducto, 140 en la terminal portuaria y generará entre 10.000 y 15.000 empleos indirectos. Preguntamos a Aratirí cómo había calculado el empleo indirecto, respondió que la estimación pertenecía al Estudio Ferrere y prometieron enviar esa información pero nunca nos

llegó.

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), que reúne a las mayores empresas y asociaciones nacionales de minería del mundo, aplica un coeficiente de 1,7 a 2,5 sobre los empleos directos para calcular los empleos indirectos que puede generar una gran explotación minera. Si aceptamos que Aratirí generaría 1.450 empleos directos y le aplicamos el coeficiente del ICMM nos daría de 2.465 a 3.625 empleos indirectos, cuatro veces menos que las estimaciones de la empresa. Pero Aratirí no iría a operar en una región desértica, sino ocupada por otras actividades económicas. Según la Tabla 1.3-107, en las tres áreas ocupadas por el proyecto hay 3.573 personas dedicadas a la agropecuaria que serán afectadas por la minera y 4.156 trabajadores cuyo grado de afectación no puede deducirse directamente. El balance es cero o negativo. Los 140 empleos estimados por la empresa para la terminal portuaria no son, por lejos, equiparables al trabajo existente en esa zona. (Víctor Baccheta, El Observador, 11-5-2001)

Hasta aquí los datos y los hechos. Concretos. No son un invento de "militantes revolucionarios", ni de la "izquierda radical". Hasta aquí, intentamos democratizar la información, por aquello que decía el Che: "Para transformar la realidad, hay que conocerla". Hasta aquí, buscamos "esclarecer", socializando información precisa. Comprobable. Muchas veces ocultada. Hasta aquí, levantamos (y apoyamos) la propuesta de movilización realizada el 13 de mayo, donde participaron unas 3.000 personas de distintas organizaciones sociales y vecinales que protestaron frente al Palacio Legislativo. Y, hasta aquí, volvemos a insistir: hay que organizarse para luchar. Sabiendo de que se trata.

**vivienda**

# *El fracaso del "Plan Juntos"*

**Carlos Alberto Boga (Militantes Guevaristas)**

A 16 meses de asumido el gobierno de Mujica, sigue en deuda (como otras tantas promesas electorales) con el plan de viviendas para los más pobres (muy pobres). La idea original establecía la construcción de 1.000 viviendas en los primeros 100 días de gobierno y, si todo marchaba bien, unas 30.000 antes del 2015. Aunque la meta finalmente se bajó a 5.500. Se iba a realizar con aportes de "grandes empresarios" (capitalistas filántropos) y donaciones (en portland) de ANCAP; con "trabajo voluntario" y el "laburo" de militares, presos, estudiantes y afiliados del SUNCA.

Pues bien, ¿en qué anda el "buque insignia de las políticas sociales"? El proyecto de ley que le da marco regulatorio aún no tiene ni media sanción en el parlamento. Hay seis brigadas de voluntarios (en total algo más de 200 personas) que trabajan los fines de semana en intervenciones del plan en el área metropolitana: en Cerro Norte, el asentamiento Las Cabañas (ubicado en Flor de Maroñas) y el Primero de Mayo (en Casavalle), Verdisol y Nuevo París. En el interior del país, se empezará en Las Piedras y Artigas, donde los vecinos de un asentamiento esperan desde el verano; hasta ahora solo les pusieron dos puertas. En una localidad rural de Tacuarembó tienen casi pronta una vivienda. Se anuncia, eso sí, que la gran apuesta será un barrio nuevo de 434 viviendas que se construirá en Luis Batlle Berres y Camino de las Tropas, cerca de Paso de la Arena, en los accesos a Montevideo. El plan tiene unos 50 empleados fijos. A 16 meses de gobierno van construidas (entre refacciones, construcciones, arreglos, etc.)... ¡35 casas!

En cada intervención, los propios beneficiarios deben

colaborar en la obra: ese es el requisito para integrarse al plan, como si fuera una cooperativa de ayuda mutua. El gobierno aporta materiales y algo de mano de obra, pero si el involucrado "no da nada de sí", no se avanza. Al principio los bloques eran fabricados por voluntarios en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, pero ahora los hacen los propios vecinos en donde se construye. El presidente cede el 70% de su sueldo -que ronda los 230.000 pesos líquidos- y en febrero le dijo a El País que ya llevaba aportados 100.000 dólares. Pero además hay un presupuesto anual de cinco millones de dólares, "donaciones" de privados y dos cuentas abiertas en el Banco República. Se han recibido aportes de hasta un millón de dólares, según una fuente del gabinete. La ministra de Vivienda, Graciela Muslera -que es del MPP y muy cercana a la senadora Lucía Topolansky- ha reconocido que da parte de su sueldo al plan. Pero el presidente nunca pidió colaboración a los miembros del gabinete, dijo un ministro que no hace aportes.

**NINGUN PLAN DE VIVIENDA POPULAR**

En Artigas, a cientos de kilómetros de Barros Blancos, todavía esperan. En noviembre el presidente Mujica visitó el departamento y anunció que había conseguido un millón de dólares para hacer vivienda con el "Plan Juntos". Y el 10 de marzo la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, y la directora del plan Delia Soria anunciaron que se empezaría a trabajar en el barrio Cala. La promesa es construir 28 viviendas para un grupo de vecinos que vive en un asentamiento de casas de madera, sin luz ni agua. Dos meses más tarde, el semanario local La Noticia publicó que allí no se ha hecho nada. La vecina María Nuñez dijo que "las autoridades no dieron más la cara" y que los vecinos

"quedaron haciendo serenadas" para que el viejo predio de AFE donde se construirá un salón comunal no sea invadido. "Eso hasta que empezó a apretar el frío y no se puede estar en un lugar (la estación) que no tiene ventanas, puertas ni las mínimas condiciones". Los vecinos enviaron una carta a la intendenta Patricia Ayala donde plantean el malestar y dicen que les mintieron. El periodista local Andrés Torterola, quien escribió aquella nota, dijo a Qué Pasa que en las últimas semanas el único avance notorio fue poner dos puertas en la vieja estación que funcionará como salón comunal. La situación se agravó porque hace unos días se incendió un rancho y la dueña de casa se quedó sin nada. Los vecinos dicen que en la última reunión la intendenta ya no prometió nada: "Dijo que lo que va a ser, va a ser", cuenta María Nuñez desde el barrio Cala. La intendenta, quien es una persona muy cercana al presidente Mujica, dijo a Qué Pasa que reserva sus declaraciones para cuando "haya algo más concreto para hablar".

Hay dos casas construidas como plan piloto de lo que será un barrio de 434 viviendas nuevas en Luis Batlle Berres y Camino de las Tropas. Es la gran apuesta del plan. Pero hay más. Cerro Norte: hay seis casas prontas y cuatro más para habitar en poco tiempo. Luego se construirán otras siete casas. Allí trabaja la brigada de voluntarios "El Hormiguero", con estudiantes universitarios y liceales. Flor de Maroñas: en el asentamiento Las Cabañitas, hicieron 12 planchadas, sustituyendo casas precarias por casas de material. Y están a medio hacer cuatro casas. Colabora la brigada José Artigas, vinculada al PIT-CNT. Casavalle: en el asentamiento Primero de Mayo hay 50 intervenciones previstas, pero hasta ahora se abrieron calles, se construyó una casa, se refaccionaron otras y hay varias a medio hacer. Un centro comunal está en construcción. Nuevo París: hay cinco obras de mejoramiento de casas, ya avanzadas. Colaboran voluntarios de la brigada Sur, con estudiantes de ciencias sociales. Verdisol: se está haciendo una vivienda de dos dormitorios para una familia. Prevén construir otra. En la zona hay un antiguo conjunto habitacional que convive con un asentamiento. Barros Blancos: Hay cuatro casas casi terminadas y algunas más en obra. En total, están previstas 26 intervenciones

En el interior del país las cosas son parecidas. En Las Piedras arrancarán obras en Villa Ilusión. En Artigas van a construir 28 viviendas para gente de un asentamiento, pero hasta ahora pusieron un par de puertas en un vieja estación de AFE. El predio donde se va a construir es cercano a dos lagunas de decantación de efluentes de un molino arrocerero, que genera fuertes olores. En Tacuarembó está casi terminada una casa en Paso del Cerro, comunidad rural ubicada a unos 50 kilómetros de la capital. Están proyectadas seis casas más. 50 funcionarios tiene el "Plan Juntos", entre el personal administrativo y quienes trabajan en la calle. 50.000 personas con problemas serios de vivienda son a las que está apuntando el "Plan Juntos". 45.000 acciones prevé el gobierno para el período, entre refacciones, alquileres y viviendas nuevas. 4.263 viviendas están "en ejecución" en 2011 por fuera del "Plan Juntos", de acuerdo a las cifras oficiales. (Fuente: suplemento Qué Pasa, diario El País)

Resultado: ninguna solución al "problema habitacional" de las capas sociales más explotadas y empobrecidas. Mientras tanto, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) entrega viviendas de "a puchito". Sobre todo, para ahorristas de "clase media" que tengan ingresos de \$ 33.000 mensuales como grupo familiar. Se les hace un seguimiento por 24 meses de "ahorro previo" para saber cuáles son las posibilidades de pago real del posible crédito. Si el BHU, considera que es "poco" el ahorro, y

"tienen dificultades", les "exhorta" a que ahorren 24 meses más (o sea 4 años) para ver si pueden acceder al crédito. En este marco, siguen viviendo casi 300.000 uruguayos en "asentamientos privados", al decir de Diego Maradona: "yo nací en un barrio privado, si, privado de todo, agua, luz, saneamiento". El 76% de los jóvenes vive con sus padres, abuelos o suegros hasta los 34 años, porque con los salarios de miseria que ganan, no tienen acceso a vivienda. A modo de ejemplo: hace 30 años un alquiler de vivienda "decorosa" no superaba el 20% de un salario promedio, hoy, un alquiler "barato" (\$7.500) es más que un salario mínimo (\$ 6.000), y casi el 70% de un salario promedio (\$11.500).

La estrepitosa caída en la "popularidad" del presidente Mujica, (según la última encuesta de Cifra ronda el 39% de apoyo, perdiendo 19 puntos desde noviembre de 2010 a junio de 2011), lo ha llevado - entre otras iniciativas - a vender el "chalet" presidencial de Punta del Este, al BROU, en la suma de dos millones seiscientos mil dólares, dinero, éste, que según parece va dirigido al "PLAN JUNTOS".

Otro "manotazo de ahogado" para intentar frenar la "caída libre" del apoyo popular. Hoy día, es mas parecido a las encuestas de opinión pública bajo gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, que a la del propio Vázquez. Quién fue catalogado por algunos sectores del FA, como mas a la "derecha", y que éste presidente iba a ir mas a la "izquierda". A 16 meses de asunción, el descrédito popular crece y se agota la "luna de miel" del ex - guerrillero con el pueblo. Y uno de esos elementos, tiene que ver con las inexistentes políticas de vivienda popular.

### **"TRABAJO VOLUNTARIO"**

La propuesta del presidente Mujica, no tiene sustento. Es como tantas otras cosas que dice el presidente en su "hemorragia" verbal. Esperar la "filantropía" de los burgueses, es como esperar "la parca"; y "culpar" a los trabajadores y el pueblo por no "comprometerse" con el "trabajo voluntario", es una grotesca afirmación.

El "trabajo voluntario" debe tener otras condiciones. Debe enmarcarse en otra realidad.

El trabajo voluntario – como lo proponía el Che Guevara, debe ser en un contexto donde los trabajadores son dueños de los medios de producción, y sus necesidades básicas elementales son contempladas.

En el marco de las relaciones sociales de explotación, donde las clases propietarias se apropian de la riqueza (colectiva) producida por los trabajadores; donde se asignan cifras monstruosas al pago de la deuda externa (este año 4.536 millones de dólares); donde los diputados, senadores y ministros de Estado perciben ingresos que rondan los \$ 180,000; donde el salario promedio nacional ronda los \$11.500 y el salario mínimo apenas llega a los \$ 6.000; donde la canasta básica familiar se ubica en \$ 42.835.

Es una inmoralidad pedirle a los más explotados y empobrecidos que hagan "trabajo voluntario".

Obviamente, al no existir un verdadero plan de viviendas populares, se generan otras consecuencias sociales: desmotivación juvenil para el trabajo, para el estudio, para el crecimiento intelectual y cultural, etc. Después vienen la "justificaciones" que estigmatizan a los "jóvenes infractores.

Explotación y "baja de la edad de inimputabilidad" están concatenadas.

Grecia

# Un polvorín de Europa

Roberto Montoya\*

La violencia volvió a ser estos días la principal protagonista en las calles de la capital griega. Ni la huelga general de 48 horas, masivamente seguida, ni las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar los días previos y el propio día en que el Parlamento votaba en una tensa sesión un nuevo brutal ajustazo, lograron impedir que el gobierno lograra sacarlo adelante por 155 votos a favor y 138 en contra.

Al conocerse la noticia en el exterior de la sede parlamentaria, situada en la céntrica plaza Syntagma (Constitución), la pacífica concentración de protesta de cientos de miles de personas se transformó. Cientos de jóvenes, provistos de máscaras antigás -hasta los turistas las compran estos días-, barras de madera, gruesas piedras y cócteles molotov, se enfrentaron a los numerosos contingentes de fuerzas antidisturbios desplegados en la zona.

Fue una verdadera batalla campal donde se produjeron cerca de 500 heridos y se practicaron numerosas detenciones. "Ustedes son los perros guardianes de los patrones y los mercados, no hijos de trabajadores", gritaban muchos manifestantes a las fuerzas policiales, que cargaban enérgicamente con sus bastones, gases lacrimógenos y un misterioso gas naranja cuya composición química se desconoce (...) Grecia es hoy día un verdadero polvorín en medio de Europa.

## EVITANDO (POR AHORA) EL DERRUMBE

Para recibir de manos del FMI y del Banco Central Europeo la primera partida de 12.000 millones de euros -de un préstamo total de más de 100.000 millones- al gobierno de Yorgos Papandreu se le exigía como condición ineludible aprobar un paquete de recortes del gasto público para el período 2012-2015 y una serie de reformas tanto o más duros que los de 2010, cuando la crisis griega hizo pensar que el euro caería sin remedio por el precipicio. Aquel plan falló y no sólo no impidió que la crisis económica y financiera siguiera cayendo en picado, haciendo aumentar el desempleo y los problemas de la población, sino que sólo un año después Grecia volvió a colocarse al borde la bancarrota.

Y la bancarrota griega supondría arrastrar consigo gravísimas consecuencias para la encadenada economía de la eurozona a la que pertenecen 17 de los 28 países miembro de la Unión Europea. "Debemos evitar un colapso del país a toda costa", dijo nervioso Papandreu en su discurso ante el Parlamento, poco antes de que se iniciara la crucial votación, recordando que el país tiene una deuda de 350.000 millones de euros, el 150% de su PIB. El gobierno prevé ahorrarse 78.000 millones de euros con el despido de 150.000 funcionarios, la venta de empresas públicas, recortes salariales y en las pensiones y una mayor presión fiscal.

En un esfuerzo por asegurarse, al menos, el voto de los parlamentarios del partido gubernamental, el Pasok -uno de ellos, Panagiotis Kouroumplis, fue expulsado por rechazar el plan de ajuste-, el primer ministro hizo un alegato dramático: "La suspensión de pagos acabaría con el sistema de salud, con el de educación, con los sueldos de los funcionarios de la Administración pública, con más

del 80% del actual sistema de pensiones". Yorgos Papandreu sostuvo que frente a tal panorama desolador había que evitar "a cualquier precio" que se derrumbara todo y apeló a la oposición a "avanzar con iniciativas comunes", rectificando los errores (...)

Con la votación de estos días en el Parlamento, Papandreu no sólo ha cumplido las condiciones impuestas por sus acreedores, sino que ha conseguido al menos por el momento evitar su propia caída, descartando ahora la convocatoria de elecciones anticipadas que días atrás parecía imposible de eludir.

## TRANQUILIDAD EN EL F.M.I.

Mientras cientos de miles de griegos desataban su ira y desesperación en las calles de Atenas, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, al igual que el resto de sus homólogos europeos y las autoridades del Banco Central Europeo y el FMI, se congratulaban por la votación parlamentaria.

Hoy mismo hay en Bruselas una cita dominical extraordinaria de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona para liberar los 12.000 millones de euros de anticipo prometidos a Grecia para atender sus obligaciones más urgentes. La Unión Europea deberá discutir también la propuesta de Francia de permitir que Grecia devuelva en un plazo de 30 años el 50% de la deuda que ya tiene contraída con sus acreedores. Mientras la UE presenta el modelo francés como una solución para no asfixiar a Grecia, algunos analistas entienden que en realidad eso supone hipotecar al país por las próximas tres décadas.

A quien seguro que ha tranquilizado la votación parlamentaria en Grecia es a la recién nombrada nueva directora del FMI, la francesa Christine Lagarde, que de esta manera no tendrá que dar sus primeros pasos al frente de esa institución con un país europeo al borde de la bancarrota. La elección de Lagarde, en sustitución del también francés Dominique Strauss-Kahn -que tuvo que dimitir tras ser acusado en Estados Unidos de intento de violación a una camarera del hotel donde se hospedaba- reafirma la tradición del FMI de seguir controlado por Estados Unidos y Europa. Una vez más falló el intento de los países emergentes por dotar al polémico FMI de un director que defendiera en su seno sus necesidades y reflejara la importancia que hoy día tienen sus economías en el concierto mundial.

El secretario de Estado del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, había apostado públicamente por la candidatura de Lagarde frente al otro candidato que se presentaba y por el que pujaban mayoritariamente los países de América Latina y el Caribe, Agustín Carstens, director del Banco Nacional de México.

Pese a la importancia de que por fin llegue una mujer al más alto cargo de un organismo como el FMI, creado para garantizar supuestamente la estabilidad cambiaria y dominado por los hombres desde su creación en 1944, el nombramiento de Lagarde no deja de ser una nueva imposición de los intereses del Norte sobre los del Sur.

\* Integra el colectivo Miradas del Sur. El artículo fue tomado del sitio de la revista Viento Sur, publicación anticapitalista de España () Los subtítulos son de En Lucha.



# La pobreza encarcelada

El miércoles 1º de junio el número dos del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, entrevistado en el programa "Código País" (Teledoce), dio a conocer una cifra ilustrativa: cuando su hermano Tabaré asumió la presidencia de la República (marzo de 2005) había en el país 5.000 presos, mientras que hoy llegan a 9.195. El dato, según el funcionario, es una muestra irrefutable que desmiente una creencia muy extendida: "los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra". Y la verdad, tiene razón. Por lo menos en lo que atañe a los gobiernos del Frente Amplio esto no parece haber ocurrido. Al revés: son más los que entran que los que salen. Como resultado -para Vázquez- de una "eficaz política de orden público" que ha puesto mano dura en reprimir el "flagelo de la delincuencia".

No obstante, estos datos que indican que las personas en prisión aumentaron cerca del 100% en estos tiempos de "país de primera", hay que descifrarlos en clave social. Porque el blanco de la "política de seguridad" no son los clasificados genéricamente como "delincuentes", sino aquellos que provienen de los sectores "más vulnerables" de la sociedad: los trabajadores empobrecidos, los precarizados, los desempleados, los niños y jóvenes hijos de la extrema miseria.

Y si alguien todavía tiene alguna duda al respecto, lo mejor es remitirse al "Censo Nacional de Reclusos" (diciembre 2010), realizado a 8.492 presos en todo el país por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en convenio con el Ministerio del Interior. Algunas de las conclusiones del estudio de 42 páginas revelan, de forma inequívoca, la fotografía de una "población carcelaria" compuesta por el escalón más bajo de la explotación capitalista.

Apenas un resumen. El 35% de los presos y presas tiene entre 18 y 25 años, y el 34,5% entre 25 y 35 años. El 40,4% tiene primaria como nivel educativo superior; solo el 26,6% ha culminado este nivel y el 13,8% no logró terminar primaria. Entre los censados se constató una temprana "inserción en el mercado de trabajo": el 50,6% tuvo su primer trabajo "estable y remunerado" antes de los 17 años, por tanto, la mayoría de los encarcelados "empezó a trabajar siendo menor de edad". El 42,1% (al momento de ser procesado) tenía un empleo, es decir, eran "asalariados privados permanentes"; un 30,2% eran trabajadores "por cuenta propia" sin local de su propiedad. La mayoría de los "reclusos" (68,9%) nunca había recibido (ni nadie de su familia) el Ingreso Ciudadano del PANES (Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social); el 63% tampoco fue "beneficiario" del Plan de Equidad. El 90,5% está preso por cometer un solo delito (sobre todo rapiña y hurto). Solamente "cuatro de cada diez reclusos (43,5%) tiene familiares o amigos con antecedentes penales". La mayoría de la población carcelaria del país tiene "una antigüedad de menos de dos años".

El Censo no incluyó una pregunta de cajón: las razones por las cuáles los detenidos se introdujeron en el "mundo del delito". Pero de los datos que surgen del estudio, así como de muchos otros que ya conocemos, se desprenden las razones más evidentes: salarios miserables, empleos basura, desempleo estructural, inaudita pobreza, familias quebradas por las "necesidades básicas insatisfechas", exclusión socio-cultural. En una palabra: víctimas de la "brecha social" que el programa económico del progresismo recicla a diario. Obviamente, el gobierno no puede reconocer esta aplastante realidad, y esgrime una teoría que raya con la inmoralidad. Como la de Eduardo Bonomi, Ministro del Interior: "Del robo para comer se pasó a la rapiña y al copamiento para satisfacer la necesidad de consumo. Hoy los robos no son producto de la pobreza, son producto de la sociedad consumista". (Discurso en el acto recordatorio de Raúl Sendic, 29-4-2011, citado por El País, 2-5-2011).

La infame campaña de los medios y las corporaciones patronales, se encarga de atizar los ánimos ciudadanos contra esta población que transita por el angosto pretil que separa la "legalidad" de la "ilegalidad". Y que, seguramente, continuará engrosando las cárceles de la pobreza. Esta manipulación de las conciencias y la estigmatización de los más explotados, favorecen las políticas de "orden público" que se sustentan en el miedo. No por casualidad las masivas razias policiales en las "zonas rojas" tienen una amplia aprobación en el resto de la sociedad.

El gobierno, por su parte, está decidido a poner orden en el "desorden" que promueven "los que no respetan la propiedad de los otros". Y se quitó la máscara filantrópica. De los planes asistenciales de "combate contra la pobreza" - que le recetó el Banco Mundial- pasó directo al escenario bélico. Porque esto es "una guerra". Una guerra social, claro. Contra las periferias de la desesperanza. Allí donde habita esa reserva descalificada de mano de obra que, como muestra el Censo, luego termina entre rejas.

El miércoles 29 de junio, en la sede del PIT-CNT, se inició la campaña "No a la Baja". Diversos movimientos sociales, dirigentes del Frente Amplio, algunos grupos de blancos y colorados, y hasta el Sindicato Único de Policías, se sumaron para oponerse a la propuesta reaccionaria de Bordaberry y Lacalle de bajar la edad de imputabilidad. El motivo de la campaña es compartible. Sobre todo si se piensa en los derechos democráticos de los más jóvenes. Sin embargo, llama la atención que todos estos mismos sindicatos, movimientos y dirigentes, ni chisten cuando se trata de los "mega-operativos". Porque los miles de pobres (entre los cuales muchísimos niños y adolescentes) que sufren sus efectos más visibles -golpizas, insultos, detenciones arbitrarias, invasión de domicilios, humillaciones de todo tipo-, también tienen derechos democráticos a defender.

**EN LUCHA**

*Es una publicación bimestral de Agrupación Nacional Prounir  
Colectivo Militante - Agrupación Militantes Guevaristas - Comuna*

*Redacción: Benito Chaín 1940 (Barrio Reus) entre Inca y Democracia  
correo electrónico: periodicoenlucha.enlucha@gmail.com*